

para hacer al solicitante el cobro de la multa mencionada.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución federal, se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del C. Juez de Distrito, que concedió el amparo al quejoso.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los fines consiguientes; archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Miguel Anza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simón Guzmán.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 4 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por Juan Acibar y Arturo Ferrer, contra providencias del Gefe político del Canton de Córdoba, que les obliga á llevar una cadena al pie, para cumplir una pena de trabajos forzados de policía que les impuso el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que los sentenciados á trabajos de policía por el H. Tribunal de Justicia del Estado, patrocinados por el C. Lic. Rafael Herrera, solicitan am-

paro de la Justicia federal contra providencias del C. Gefe político de Córdoba, que los obliga á cumplir sus condenas, aumentándoles la pena infamante de llevar una cadena y grillete al pie, cuya pena es, no solo contraria al art. 22 de la Constitución federal, sino tambien á la ilustración del siglo en que vivimos; y habiéndose pedido el informe correspondiente, ha sido emitido, manifestando la autoridad política, que es cierto el hecho que motiva la queja y que su procedimiento está apoyado en las leyes vigentes en el Estado, y entre ellas el art. 101 del Código penal, que dice: "que los condenados á sufrir la pena de trabajos de policía, tendrán un grillete al pie con su cadena, pudiendo estar unido con ella á otro reo, siempre que lo exija la seguridad de ellos y sea compatible con los trabajos á que se los destine," agregando dicha autoridad, que por lo que expone se verá que no se han separado del cumplimiento de sus deberes.

El suscrito promotor al evacuar su traslado, tiene el sentimiento de no convenir en el modo de pensar del C. Gefe político de Córdoba, pues en virtud de lo prevenido en los arts. 1º y 126 de la Constitución federal, está obligado á observar su art. 22, que prohíbe para siempre las penas infamantes, con preferencia al 101 del Código penal del Estado, por estar ambas disposiciones en abierta oposición; y por consiguiente, no es exacto que hubiese cumplido con su deber en este caso.

En consecuencia, y como efectivamente el acto que se reclama viola la garantía que á los quejosos otorga el citado art. 22, de que no se les deberá imponer ninguna pena infamante, como lo es sin duda alguna la de sufrir el grillete y cadena, con vista de lo prevenido en los arts. 101 y 102 de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, pido á V. se sirva ampararlos y protegerlos contra la indicada pena.

H. Veracruz, 31 de Marzo de 1874.—*Lic. J. M. Lopez de Escalera.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

II. Veracruz, Agosto 3 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por Juan Acibar y Arturo Ferrer, contra providencias del C. Gefe político del Canton de Córdoba que los obliga á llevar una cadena al pié, para cumplir una pena de trabajos de policía que les impuso el II. Tribunal Superior de Justicia del Estado, con cuyo acto aseguran se viola el art. 22 de la Constitución de la República que prohíbe las penas de infamia y cualquiera otras inusitadas, y pidiendo la suspension de los efectos de esa providencia; visto el auto en que se mandó suspender el acto reclamado; el informe del expresado C. Gefe político que lo emitió, acompañando copia de la sentencia impuesta á los quejosos, y pretendiendo justificar su procedimiento, en virtud de lo mandado en el art. 101 del Código penal del Estado, que dispone: "que los condenados á sufrir trabajos de policía tendrán un grillete al pié con su cadena"; lo representado por el C. Promotor fiscal, y cuanto mas ver convino, y Considerando: que el art. 101 del Código penal del Estado, que dispone que los reos tendrán un grillete al pié con su cadena, está en oposicion marcada con el artículo 22 de la Constitución general; que con arreglo á los arts. 1º y 126 de la misma, todos los jueces y autoridades estan obligados á observar estrictamente sus disposiciones con preferencia á las leyes y disposiciones que dicten los Estados, por ser aquella la suprema ley de la República; y que en este concepto y siendo cierto que el grillete y cadena, sobre ser una pena infamante porque ataca y destruye la dignidad del ciudadano, produce tambien un constante tormento, resultando en consecuencia, violada la garantía que concede el art. 22 ya citado; con fundamento del mismo artículo y de lo que disponen los 101 y 102, y de las prescripciones de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, este Juzgado falla:

1º: La Justicia de la Union ampara y protege á Arturo Ferrer y Juan Acibar,

TOMO VI.—PARTE II.

contra la providencia del C. Gefe político de Córdoba, que los mandó poner un grillete al pié con su cadena, para cumplir una pena de trabajos forzados de policía que les impuso el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

2º: Notifíquese, sáquense las copias prevenidas por la ley y elévense los autos para su revision á la Corte Suprema de Justicia.

Así lo pronunció y firma el C. Juez de Distrito del Estado: damos fé.—*Lic. Luis I. Gomez.*—De asistencia: *José M. Gonzalez.*—*Vicente Simancas.*

Es copia que certifico. H. Veracruz, 6 de Agosto de 1874.—*Luis I. Gomez.*—De asistencia: *José M. Gonzalez.*—*Vicente Simancas.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre 29 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por Arturo Ferrer y Juan Acibar, sentenciados por el Tribunal del Estado á sufrir la pena de trabajos de policía, contra el Gefe político de Córdoba que los obliga á llevar una cadena y grillete al pié, con violacion de las garantías que consigna el art. 22 de la Constitución federal. Visto el informe de la autoridad; el parecer fiscal; el fallo del inferior, con cuanto mas se tuvo presente y ver convino: por sus mismos y legales fundamentos se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito, en 3 de Agosto del presente año, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á Arturo Ferrer y Juan Acibar, contra la providencia dictada por el C. Gefe político del Canton de Córdoba, que mandó ponerles un grillete al pié con su cadena, para cumplir una pena de trabajos forzados de policía, que les impuso el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándolo testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes.

tes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*M. Auza.—Juan J. de la Garza.—José S. Arteaga.—Ignacio Ramírez.—M. de Castañeda y Nájera.—S. Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis M. Aguilar, secretario.*

Es copia que certifico. México, Octubre 12 de 1874.—*Lic. Enrique Landa, oficial mayor.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Chihuahua por el C. Reyes Gonzalez, contra la órden del Gefe político de esa Capital, que le prohíbe fundir metales y granjas en un horno que tiene establecido en la misma vecindad.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de de Distrito.

El Promotor fiscal de la Federacion dice: que el C. Reyes Gonzalez ha ocurrido solicitando, que la Justicia Federal lo ampare y proteja por creer violadas en su persona las garantías que otorgan los artículos 4º y 7º de la Constitucion general. Hace consistir este ataque, en la órden que recibió del C. Gefe político de este Distrito, por la cual se le prohíbe seguir fundiendo metales en una hacienda ó horno que tiene establecido en su casa habitacion, muy inmediata al centro y plaza principal de la poblacion. Pedido informe á la autoridad ejecutora del acto reclamado, esta lo ha rendido satisfactorio, y de este informe resulta, que la prohibicion que se hizo al quejoso no es absoluta, puesto que no se le ha dicho que no funda metales, ni en aquel lugar ni en otro alguno, sino unicamente, que suspenda sus trabajos de fundicion en aquel horno ó

hacienda de beneficio, por el daño grave que causaba á la poblacion con el humo malsano que expiden al fundirse dichos metales: así consta por el informe vertido por la Junta de sanidad de esta Capital. Recibido este juicio á prueba por ocho dias, el quejoso ha presentado tres testigos, de cuyas declaraciones se deduce lo mismo que ha manifestado el C. Gefe político en su informe, esto es, que la prohibicion de no fundir no ha sido absoluta, sino con referencia unicamente al lugar ó punto en que se estaba verificando.

La garantía que invoca el quejoso consignada en el artículo 4º de la Constitucion, puede alguna vez suspenderse por sentencia judicial cuando ataque los derechos de tercero, ó por resolucion gubernativa cuando ofenda los de la sociedad. En este último caso puede colocarse ó suponerse la órden dictada por el C. Gefe político del Distrito, en virtud del perjuicio grave que recibia toda una sociedad, dimanando de allí las continuas quejas que recibia del vecindario para que se mandaran suspender aquellos trabajos. El quejoso puede muy bien establecer sus hornos en un lugar mas lejano de la poblacion en donde no ocasiona mal alguno á la salubridad pública, y si entonces la misma Gefatura política le prohibia este útil y honesto trabajo, y el aprovecharse de sus productos, indudablemente habrá lo que no hay ahora, violacion de la garantía que invoca el quejoso. Mucho menos la hay de la consignada en el artículo 27 de la misma Constitucion, porque ninguna propiedad se ha ocupado ni tratádose de ocupar del quejoso. Como la sentencia que se pronuncie debe ser tal, que solo se ocupe de la persona del quejoso, limitándose á protegerlo ó no en el caso especial sobre que versa el juicio, sin hacer ninguna declaracion general respecto de la ley ó acto que lo motive, inútil le parece al Promotor fiscal que suscribe ocuparse de lo que se dice de la Casa de moneda de esta Ciudad, y de otros casos análogos que cita el quejoso.